

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, diez (10) de noviembre de dos mil veinte

AUTO.

MAGISTRADA PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES

ACCIÓN:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2020-00208-00
DEMANDANTE:	JUSTINE VELÁSQUEZ MARTÍNEZ Y OTROS Apoderada: CAROLINA PAZMIÑO TORRES <a href="mailto:torresnotificacionesjudiciales@gmail.com">torresnotificacionesjudiciales@gmail.com</a>
DEMANDADO:	NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DESAJ
ASUNTO	LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO

LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO

I. PUBLICIDAD.

Por Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020 se levantó a partir del 1º de julio la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura entre el 16 de marzo y el 31 de junio de 2020 **y se inició el reparto híbrido de procesos e ingresos a Oficina de Apoyo y Siglo XXI**. En tal virtud:

Se informa a las partes que las actuaciones procesales subsiguientes en este proceso se surtirán conforme a lo dispuesto por el **Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020**. El canal oficial de comunicación e información para recibir memoriales únicamente para este asunto es el correo electrónico: [achamorb@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:achamorb@cendoj.ramajudicial.gov.co). Se creará el expediente electrónico en SharePoint y allí se agregarán las piezas procesales.

Las partes informarán el canal digital elegido para surtir las actuaciones y notificaciones del presente proceso conforme ordena el artículo 3 del decreto 806. **En su defecto se tomarán como tales los correos electrónicos que obran en el proceso y en el SIRNA.**

II. IMPULSO:

Se decide si existe o no mérito para librar mandamiento de pago en contra de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, en virtud de la demanda ejecutiva presentada a través de apoderada judicial por JUSTINE VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ ARBOLEDA e ISABEL CRISTINA CORREA MARTÍNEZ.

1) ANTECEDENTES.

El título base de recaudo es la sentencia del 12 de septiembre de 2017 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la cual se dispuso lo siguiente:

**“PRIMERO.- DECLARAR** administrativamente responsable a la **NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, por las afectaciones patrimoniales ocasionadas a las señoras María Fernanda Martínez Arboleda, Justin Velásquez Martínez e Isabel Cristina Correa Martínez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO.- En consecuencia, CONDÉNESE** a la **NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, a pagar a las actoras los siguientes valores:

1. *Por concepto de la actualización de los perjuicios morales:*

(i) **Justine Velásquez Martínez**, la suma de cuatro millones setecientos ochenta y nueve mil noventa y un pesos (\$4.789.091,00).

(ii) **María Fernanda Martínez Arboleda**, la suma de cuatro millones setecientos ochenta y nueve mil noventa y un pesos (\$4.789.091,00).

(iii) **Isabel Cristina Correa Martínez**, la suma de dos millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve pesos (\$2.394.549,00)."

La decisión anterior quedó debidamente ejecutoriada el 5 de diciembre de 2017, tal como consta en la constancia expedida por esta Corporación, visible a folio 46.

## 2) CONSIDERACIONES

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA<sup>1</sup> establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato —que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual— o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP<sup>2</sup> establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i)** un documento que provenga del deudor o de su causante; **(ii)** una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; **(iii)** las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y **(iv)** los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva **es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo**, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del

<sup>1</sup> Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

<sup>2</sup> Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.



deudor.

El título ejecutivo contiene tanto elementos sustanciales como formales. En cuanto a los primeros, se debe verificar si aquél contiene una obligación clara, expresa y exigible al momento de incoarse la demanda. En tal sentido, el Consejo de Estado ha dicho:<sup>3</sup>

1. La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.
2. La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.
3. La obligación es exigible cuando únicamente es ejecutable cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido.

A su turno, la doctrina se ha pronunciado sobre la necesidad de que el título objeto de ejecución sea claro y expreso, en los siguientes términos<sup>4</sup>:

*“El ser expresa la obligación, implica un requisito que se puede entender mejor si analizamos etimológicamente el concepto. El vocablo expresar, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “manifestar con palabras lo que uno quiere dar a entender” y expreso lo que es “claro, patente, especificado”,<sup>5</sup> conceptos que aplicados al del título ejecutivo implican que se manifieste con palabras, quedando constancia, usualmente documental escrita y en forma inequívoca de una obligación; de ahí que las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva.<sup>6</sup>*

*Como complemento se exige, con redundancia, pues se acaba de ver que ser expreso conlleva la claridad, que la obligación sea clara, es decir que sus elementos constitutivos, sus alcances, emerjan con nítida perfección de la lectura misma del título ejecutivo, en fin, que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la conducta que puede exigirse al deudor”.*

Respecto a los elementos formales del título ejecutivo, es de precisar que estos son los que se refieren a los documentos que contiene el respectivo título ejecutivo y a la forma en la que deben aportarse. Es de aclarar que la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha entendido que, en los asuntos donde se pretende el cumplimiento de decisiones judiciales a través del proceso ejecutivo, el título que presta mérito no es de los denominados “complejos”<sup>7</sup>; puesto que solo se requiere copia de la sentencia ejecutoriada con la que se reconoció y ordenó el pago de una suma de dinero, ya que es esta la que contiene la obligación expresa, clara y exigible<sup>8</sup>.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. *Los procesos ejecutivos*. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.

<sup>4</sup> Código General del Proceso, Parte Especial, Hernán Fabio López Blanco, páginas 507 y 508, DUPRÉ Editores, Bogotá D.C., 2017.

<sup>5</sup> Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 21ª ed. Madrid, 1992, págs. 661.

<sup>6</sup> Cfr. Hernando MORALES MOLINA, Curso de derecho procesal civil, Parte especial 6ª ed., Bogotá, Edit. ABC, 1973, pág. 75, quien afirma con acierto que no valen, pues, las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación, ni tampoco las expresiones presuntas, salvo el caso de la confesión ficta y en éste, únicamente respecto de las preguntas asertóricas formuladas al interrogado que no compareció. Es decir, que las llamadas obligaciones implícitas, esto es, las que están incluidas en el documento (tanto en el escrito como en el documento que contiene la declaración verbal), pero sin que estén expresamente declaradas, no pueden exigirse ejecutivamente.

<sup>7</sup> Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, C.P. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en providencia 14 de marzo de 2019 Radicación número: 25000-23-42-000-2015-02057-01(0044-16).

<sup>8</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: William Hernández Gómez Bogotá, D.C. Sentencia del 18 de febrero de 2016 bajo el número de radicado: 11001-03-15-000-2016-00153-00(AC) Actor: Flor Maria Parada Gómez Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Posición reiterada en la sentencia de tutela del 3 de agosto de 2017, con ponencia del Dr. William Hernández Gómez, dentro del proceso 11001-03-15-000-2017-01577-00(AC) « Esta Corporación a través de la Sección Tercera ha señalado que, por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez. [...] No obstante, esta Subsección considera que para efectos de librar mandamiento de pago de las sentencias emitidas por los funcionarios pertenecientes a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, **no es requisito la copia de los actos administrativos que dieron cumplimiento a las órdenes judiciales para conformar el título ejecutivo.** [...] De la norma anterior [artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], claramente se deduce que constituyen títulos ejecutivos... (i) la sentencia debidamente ejecutoriada proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y; (ii) las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. Ahora bien, según el CPC y el CPACA la sentencia es la providencia que decide sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito. Por tanto, es una integralidad jurídica autónoma y suficiente con fuerza de cosa juzgada, provista de ejecutividad y ejecutoriedad para que sea debida y oportunamente cumplida.

Así mismo, se determinó que exigir la copia auténtica del acto administrativo que dio cumplimiento al fallo judicial a ejecutar, se constituye en un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”. Con relación a ello, se indicó:

*“ Repárese que las resoluciones núm. PAP 039428 del 21 de febrero de 2011 y núm. UGM 010620 de 2011 fueron expedidas por la entidad con el único propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en las sentencias citadas, luego, no son actos administrativos que las complementaron o adicionaron y en modo alguno cambiaron lo que en ellas se encuentra ordenado. En consecuencia, no forman parte del título ejecutivo como lo expresó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, a la entidad demandada correspondía demostrar que ya había cumplido la obligación impuesta en las sentencias, para lo cual debía allegar las pruebas que lo demostraran, que en este caso, no son otras que los actos administrativos expedidos en cumplimiento de la sentencia, conforme lo consagrado en el artículo 509 del C.P.C.. Al ordenarse a la parte demandante que allegara copia auténtica de los actos administrativos que dieron cumplimiento parcial a la condena impuesta en la sentencia, es un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, lo cual fundamenta la intervención en sede de tutela.*

***Bajo tal perspectiva, en nada influye dentro del proceso ejecutivo que las mencionadas resoluciones hubiesen sido aportadas en copia simple y en esa medida, al Tribunal correspondía librar mandamiento de pago, puesto que el título ejecutivo estaba conformado por las sentencias que prestan mérito ejecutivo de las cuales surgió la obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad.***<sup>9</sup> (Negritas fuera del texto)

Entre tanto, en lo que refiere a la forma en que se deben aportar las sentencias que contienen la obligación a ejecutar, es preciso indicar que el artículo 114 del Código General del Proceso dispone:

***“ Artículo 114. Copias de actuaciones judiciales.*** Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

(...)

***2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria.... ( negrillas por fuera de texto)***

Como se puede colegir, las sentencias que se pretenden valer como título ejecutivo, conforme al precitado dispositivo normativo se deben aportar con su respectiva constancia de ejecutoria.

Así mismo, el Consejo de Estado, en sede de tutela indicó que “ el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, antes citado, no exige que el mencionado documento deba estar en original. En efecto, la norma se limita a señalar que constituyen título ejecutivo “las sentencias debidamente ejecutoriadas (...) “, además, “el artículo 244 del Código General del Proceso, establece que “(...) los documentos públicos o privados emanados de las partes o terceros, en original o copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos (...)”. Así mismo, dispone que (...)” se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo”.<sup>10</sup>

De acuerdo con los apartes normativos, doctrinales y jurisprudenciales expuestos, en relación a los procesos ejecutivos derivados del incumplimiento total o parcial de una sentencia judicial, se puede arribar a las siguientes conclusiones:

1. Prestarán mérito ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se haya condenado a la administración al pago de una suma de dinero.
2. El título ejecutivo en mención debe contener una obligación expresa, clara y actualmente exigible.
3. Las sentencias, junto con su constancia de ejecutoria, pueden ser aportadas al proceso en copia simple, toda vez que se presumen auténticas de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código General del Proceso.

<sup>9</sup> *Ibídem*

<sup>10</sup> Aparte tomado del fallo de tutela del 3 de agosto de 2017, bajo el proceso 11001-03-15-000-2017-01577-00(AC)





4. No es indispensable aportar la copia o el original del acto administrativo que da cumplimiento a la decisión judicial, toda vez que este no hace parte del título ejecutivo que solo está constituido por las sentencias judiciales que contienen la obligación. De exigirse, el juez incurrirá en un exceso ritual manifiesto.
5. Si bien el acto administrativo que acata la decisión judicial no hace parte del título ejecutivo, este sirve de contraste para determinar si la sentencia fue acatada a cabalidad por parte de la administración.

### 3) CASO CONCRETO.

El artículo 299 del CPACA dispone que *“Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento”*.

El artículo 156.9 del C.P.A.C.A., *“En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva”*.

En el presente asunto, la **acción ejecutiva se encuentra vigente** al momento de la presentación de la demanda, pues se interpuso dentro del término señalado en el artículo 164, literal K)., toda vez que la sentencia cuyo cumplimiento se pretende quedó ejecutoria el 5 de diciembre de 2017 y la demanda ejecutiva se presentó el 9 de marzo de 2020, es decir, dentro de los cinco (5) años de que trata la norma en cita.

Revisada la demanda, se tiene que las ejecutantes **se encuentra legitimadas en la causa por activa**, por ser las beneficiarias de la sentencia. Por su parte, la Rama Judicial - DESAJ, se encuentra **legitimada en la causa por pasiva**, por ser la condenada en la sentencia proferida por esta Corporación.

Además, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 82 y ss del CGP (designación del juez, nombre y domicilio de las partes, nombre del apoderado, las pretensiones, los hechos fundamento de las pretensiones, se anexó el poder<sup>11</sup>, la sentencia título de ejecución<sup>12</sup>, la constancia de ejecutoria de la precitada providencia<sup>13</sup>, la solicitud de pago realizada a la entidad<sup>14</sup> y la respuestas dada por la entidad ejecutada<sup>15</sup>, el CD<sup>16</sup> y la dirección electrónica del apoderado de la parte ejecutante<sup>17</sup>.

La obligación es **EXPRESA**, pues se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa. Es decir, en la sentencia judicial se condenó a la RAMA JUDICIAL - DESAJ a pagar unas sumas de dinero a favor de las ejecutantes por concepto de actualización de los perjuicios morales y se dispuso dar cumplimiento a la providencia dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Es **CLARA**, pues sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación, pues es claro que la efectividad de la obligación debe surtirla la RAMA JUDICIAL - DESAJ a favor de las demandantes por unas sumas y equivalencias determinadas, con sus correspondientes intereses corrientes y moratorios.

Es **EXIGIBLE** pues no depende del cumplimiento de un plazo o condición toda vez que la sentencia quedó ejecutoriada el 5 de diciembre de 2017, la parte ejecutante solicitó el pago de la misma el 25 de agosto de 2018 y transcurrió el plazo fijado en el artículo 177 del C.C.A, para su cumplimiento, sin que se haya realizado el pago.

<sup>11</sup> Folio 20.

<sup>12</sup> Folios 21-44.

<sup>13</sup> Folio 46.

<sup>14</sup> Folios 11-19.

<sup>15</sup> Folios 17-18.

<sup>16</sup> Folio 49.

<sup>17</sup> Folio 15.

En cuanto a los intereses moratorios se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 177 del CCA, de conformidad con los criterios que a continuación se señalan:

- Las cantidades líquidas reconocidas en la sentencia devengarán intereses comerciales y moratorios.
- Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.

En el presente asunto, a folios 11-15 obra la correspondiente radicación de la solicitud de cumplimiento del fallo judicial objeto de ejecución, por la apoderada de la parte demandante ante la entidad accionada el día 25 de agosto de 2018, es decir, fuera del término de los 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia (5 de diciembre de 2017). Por tanto, en este caso cesaron los intereses corrientes y moratorios desde el 5 de junio de 2018 hasta el 25 de agosto de 2018.

Por lo anterior se concluye que la demanda reúne los requisitos de los artículos 82, 83 y siguientes, del C.G.P. y contiene título con los requisitos legales conforme al artículo 422 Ibídem, el despacho dando cumplimiento al Art. 430 del C.G.P. por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Despacho 11 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra de la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL –SECCIONAL CALI,** por los siguientes valores:

- Para la señora JUSTINE VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, por concepto de actualización de perjuicios morales, la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS (\$4.789.091).
- Para la señora MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ ARBOLEDA, por concepto de actualización de perjuicios morales, la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS (\$4.789.091).
- Para ISABEL CRISTINA CORREA MARTÍNEZ, por concepto de actualización de perjuicios morales, la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$2.394.549).
- Por los intereses moratorios sobre las sumas a que se refiere el ítem anterior, causados desde la fecha de ejecutoria de la sentencia título de ejecución, esto es, el 5 de diciembre de 2017 hasta el 5 de junio de 2018 y desde el 25 de agosto de 2018 hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, de conformidad con lo previsto en los artículos 176 y 177 del CCA.
- Por las costas del proceso y las agencias en derecho, las cuales se liquidarán en la oportunidad procesal pertinente.

**SEGUNDO: Se ADVIERTE** que las sumas ordenadas en los numerales anteriores serán nuevamente objeto de revisión dentro de la oportunidad procesal pertinente.

**TERCERO: ORDENAR** a la parte ejecutada, que de conformidad con el artículo 431 del Código General del Proceso, **deberá cancelar las anteriores sumas a la parte demandante dentro de los cinco (5) días siguientes al presente proveído, o en su defecto, proponer excepciones en el término de diez (10) días siguientes a la presente decisión.**

**CUARTO: NOTIFICAR** personalmente el presente proveído a la entidad ejecutada **NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DESAJ**, a través de su representante legal o a quien se haya delegado la facultad de recibir notificaciones, al Ministerio Público<sup>18</sup> y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por estado a la parte ejecutante, corriéndole traslado conforme los términos del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso en concordancia con los artículos 431 y 442 del C.G.P, la notificación se efectuará remitiendo mensaje de datos al correo electrónico<sup>19</sup> para notificaciones judiciales de las entidades y en la Secretaría de la Corporación.

**QUINTO: ADVERTIR** a los sujetos procesales que los memoriales que se presenten durante el trámite del presente proceso, deberán enviarse al correo electrónico de la secretaria [rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co), con copia a los correos electrónicos de los demás sujetos procesales. **De igual forma, se hace necesario que en los memoriales y correos que envían, se identifique con claridad el NÚMERO DE RADICADO DEL PROCESO CON LOS 23 DÍGITOS SEPARADOS POR GUIÓN, NOMBRE DEL MAGISTRADO PONENTE, NOMBRE DEL DEMANDANTE y EL ASUNTO.**

**SEXTO: RECONOCER** a la abogada CAROLINA PAZMIÑO TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.606.627 y portadora de la Tarjeta Profesional No. 113.574 del C.S.J, como apoderada de la parte ejecutante en los términos de<sup>20</sup>l poder conferido.

#### **NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

  
**ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES**  
Magistrada

<sup>18</sup> Art. 171 No. 2 CPACA.

<sup>19</sup> Art. 197 inc. 2 CPACA concordado art. 612 C. G. del P.

<sup>20</sup> Folios 20 y 48.